

Izquierda y populismo en la política argentina

Publicado en: Pedro Pérez Herrero (comp..) *La izquierda en América Latina*, Instituto Universitario Ortega y Gasset y Fundación Pablo Iglesias, Madrid, páginas 115 a 190, 2006.

Marcos Novaro

Introducción: el tiempo de la izquierda y el peso de la historia

Un análisis a esta altura convencional de la actualidad de la izquierda en América Latina señala que hay dos modelos al respecto en la región, uno el representado por Chávez, esencialmente populista, antiliberal (eso es, no sólo contrario al neoliberalismo económico, sino también y más preocupantemente, al republicanismo y liberalismo político), estatista y antinorteamericano; y otro representado por Lagos, moderado en todo pero sobre todo favorable al libre mercado, al fortalecimiento de las reglas de la democracia liberal y a la búsqueda de acuerdos comerciales y políticos con el mundo desarrollado, incluido EEUU. Frecuentemente los analistas que refrendan esta idea hacen a continuación un listado de casos correspondientes a cada “tipo ideal”, y ello les sirve para elogiar o criticar a unos y otros según sus preferencias. Pero sucede que algunos, a veces demasiados, líderes y gobiernos resultan difíciles de ubicar en cualquiera de las dos listas, y entonces la cosa se complica. Con Kirchner y su gobierno suele suceder esto. Para ellos se reserva una tercera categoría, “gris” o ambigua, o bien se describen los rasgos que los asemejan a uno de los dos modelos seguidos de los “peros” que impedirían considerarlos un caso más entre otros. En principio, asumamos que estas formas de ver la situación, las tipologías enunciadas y los problemas de clasificación de al menos algunos de los casos a los que ellas se aplican, son útiles y pertinentes. Con todo, en cuanto encaramos la cuestión con algo más de profundidad se nos presenta un problema teórico y metodológico que obliga a revisar esas premisas: ¿no estaremos cayendo en un error ya frecuentemente cometido (por ejemplo cuando se modelizó las transiciones democráticas, o cuando se hizo lo propio con las reformas de mercado), considerar la complejidad de cada caso nacional en términos de su “grado de desviación” de un tipo ideal?, ¿no resulta más interesante y consistente encarar las peculiaridades de cada gobierno, coalición y líder en términos de las tradiciones, los problemas y las estrategias para resolverlos que en cada caso están presentes? De este modo, sin renunciar a nociones como “izquierda populista”, “socialdemocracia”, y otras, podremos analizar cada gobierno y liderazgo, en vez de por la referencia a abstracciones, como fenómenos específicos y multifacéticos que ocurren en el marco de también multifacéticas tendencias.

Al encarar con este enfoque el caso argentino, encontramos tres rasgos fundamentales, que tanto permiten identificarlo como un fenómeno populista, como explicar su relativa moderación y equilibrio en términos institucionales, de política exterior y económica. Primero, la fortaleza de una tradición populista, encarnada principalmente por el partido peronista, que encuentra sin embargo tanto en él como en la cultura política de la sociedad argentina en general cierta contención ideológica y antidotos prácticos: la labilidad que demostró el peronismo para dejar atrás el neoliberalismo que abrazó entre 1989 y 1999, cuando Carlos Menem aplicó amplias reformas de mercado, y reinventarse en clave populista y nacionalista opera a la vez alentando a casi todos a asumir muy superficial y tibiamente el nuevo credo oficial, y estimulando a otros actores políticos y a los grupos sociales en general a comportarse en la misma forma lábil u oportunista. En segundo lugar, las transformaciones registradas en la economía y el Estado y los saldos que ellas arrojaron, incluida la crisis de 2001 y el fenomenal ajuste posterior, ofrecen tanto oportunidades para la crítica y la reversión de algunas de las políticas liberalizadoras y antiestatistas, como aún más atractivas para el crecimiento económico en el marco de reglas de mercado y estabilidad ya medianamente establecidas: la consecuencia ha sido un mix de ruptura y continuidad con las políticas de los noventa, que combina manejo ortodoxo de las cuentas públicas y el mercado cambiario, con mayor intervención en inversiones y precios. Por último, en cuanto al tipo de estrategia desarrollada por Kirchner y su gobierno, debemos decir que los rasgos populistas de la misma, en particular la escisión del campo político en opciones antagónicas y la identificación de la propia como única auténticamente legítima, en términos nacional/populares, han encontrado en el complejo entramado del peronismo, los intereses empresarios y sindicales mecanismos de negociación y compensación que no difieren sensiblemente de los desplegados por Menem, que también contraponía dos opciones, entonces la de la modernización capitalista y la del atraso estatista, pero en los hechos tendía puentes de plata para la adaptación de las estructuras políticas tradicionales, las rentas empresarias y los santuarios de poder corporativo de los gremios a las condiciones del “nuevo orden” por él promovido.

Como vemos, pensar el fenómeno kirchnerista, la emergencia de una coalición basada en el peronismo y con una orientación de izquierda populista, nos exige asumir una perspectiva histórica bastante amplia. Y ello no sólo porque dicho fenómeno se enraíza en lo que ha sido una larga gravitación del populismo en la política argentina, y tradicionales problemas de la izquierda para lidiar con él; sino también porque diez o quince años atrás hubiera sido muy difícil prever que surgiera un fenómeno de este tipo, y más aún que él lograra amplia aceptación en sectores de izquierda no peronistas.

Desde la reinstauración de la democracia en Argentina, en 1983, la izquierda que tuvo mayores oportunidades de desarrollo fue la que tomó cierta distancia del populismo y enfrentó al peronismo. Los años noventa fueron particularmente propicios para ella, debido a la crisis que experimentaron los dos partidos tradicionalmente mayoritarios. Las reformas de mercado de Menem significaron hacer a un lado históricos compromisos populistas, nacionalistas y estatistas y someter al peronismo a fuertes tensiones. Las fuerzas de centroizquierda, e incluso algunas de izquierda más radical, tradicionalmente marginales, pudieron entonces capitalizar el descontento de sectores sindicales y de votantes populares hasta entonces identificados con él. Por su lado, las dificultades que encontró el radicalismo para cumplir con su rol de oposición durante estos años alentaron a amplios sectores medios a buscar otras vías de expresión de sus preferencias. La formación del Frente para un País Solidario (FREPASO), confluencia de una amplia gama de grupos de

centroizquierda y disidentes de las fuerzas tradicionales en 1994, y su rápido crecimiento electoral, reflejaron este debilitamiento del bipartidismo. Y alentaron a augurar que la izquierda argentina estaba finalmente en condiciones de resolver sus históricas taras, ganar el apoyo de sectores amplios de la sociedad sin integrarse a, ni replicar los déficits de, los dos grandes partidos del siglo XX, crear una expresión partidaria abarcadora de la pluralidad de corrientes ideológicas e identitarias que pueblan el sector, integrada en un sistema partidario que se completaría con una no menos amplia y heterogénea fuerza de centroderecha, y tomar finalmente parte de una experiencia de gestión que le permitiera superar su tradicional limitación al desempeño de una “política negativa” en sede legislativa. Entre 1994 y 1997 el FREPASO creció rápidamente y ese último año conquistó, en alianza con el radicalismo, una mayoría electoral que lo catapultó al gobierno nacional en 1999. Sin embargo, contra todos estos datos alentadores, la historia se tomaría revancha en los años siguientes: a los serios problemas de gobierno que debió enfrentar se sumó el estallido de debilidades y conflictos internos, disimulados hasta entonces detrás del ascenso electoral, que condujeron a su acelerada y completa descomposición.

El derrumbe del gobierno de la Alianza, a fines de 2001, y el regreso del PJ al poder, fueron la ocasión para que la política argentina experimentara un nuevo y sorprendente giro: se formó una fuerte corriente progresista en el peronismo, que dio vuelta la página de la experiencia menemista de modo tal que reposicionó muy velozmente y sin grandes costos al histórico partido de Perón como expresión de los “intereses populares”, fomentó una fuerte polarización entre el gobierno, encarnación de los valores del progreso y la justicia, y “la reacción”, y colocó a las fuerzas de izquierda y centroizquierda frente a un dilema que en los noventa habían creído superado, sumarse a dicha corriente y colaborar con el gobierno peronista, o intentar diferenciarse de ella para construir un espacio propio y autónomo de la “política tradicional”. Un dilema que, como aquí intentaremos mostrar, tiene mucha historia en la vida política argentina y ha resultado hasta hoy irresoluble.

Si bien la izquierda argentina parece gozar en los albores del nuevo siglo de muy buena salud, tanto en el kirchnerismo como incluso en la crítica a sus limitaciones, es difícil que eso signifique la superación de sus problemas históricos, de identidad e ideología, consistencia programática y fortaleza organizativa. También cabe dudar de que la formación de un vértice “progresista” en el peronismo, y la captación de aliados en fuerzas de izquierda o centroizquierda por parte del mismo, signifique la “definitiva solución” del dilema que ese partido presentó a quienes intentaron ubicarlo ideológicamente, y la pronta emergencia, en consecuencia, de otro polo, no peronista y de centroderecha, que completaría, esta vez sí, un nuevo y más estable sistema de partidos. Se requiere, en suma, de una revisión desapasionada de los procesos previos y posteriores a la última crisis, de modo de poner en perspectiva la situación actual y evitar conclusiones apresuradas.

En este trabajo lo intentaremos, empezando con un análisis de las tensiones entre el populismo y las izquierdas a lo largo del siglo XX; para centrarnos luego en los cambios registrados en la vida política a partir de 1983, y en particular durante los años noventa, con el objeto de desentrañar las continuidades y discontinuidades que ellos implicaron para las izquierdas y las demás fuerzas políticas. A continuación, a partir de una rediscusión de la crisis de 2001, analizaremos la emergencia del liderazgo de Kirchner y la evolución de su gobierno. Cerraremos el trabajo con una reflexión sobre las tomas de posición intelectual ante este fenómeno, que tanta gravitación tienen sobre el mismo. Al respecto interesa mostrar que, más allá de la convencional oposición entre populismo y socialdemocracia, lo que resurge con fuerza en el kirchnerismo y en especial entre los intelectuales enrolados en

él es una concepción estructural y esencialista de la izquierda, que se autodefine a partir de una “contradicción principal” y la consecuente atribución de valores y desvalores a los actores: el pueblo, la nación, las empresas extranjeras, los organismos financieros. A más de una involución respecto de una mucho menos rígida y maniquea concepción posicional de la izquierda que floreció en años previos, y que permite poner el foco en políticas públicas, procesos y estrategias específicas, lo cierto es que ese esencialismo está en las antípodas de la exaltación típicamente peronista de la ubicuidad de los actores. De lo que resultará, tarde o temprano, una crisis de identidad para el peronismo kirchnerista, y para las opciones de izquierda que en él se han enrolado.

1. La herencia histórica: la izquierda acorralada por el populismo

Si algo caracteriza la historia política argentina en el siglo XX es la presencia descollante de movimientos populistas y la fuerte inestabilidad de los regímenes que se organizaron, sea en torno a dichos movimientos, sea contra ellos, excluyéndolos (Aboy, 2001). En los inicios del siglo, la Unión Cívica Radical impulsó la ampliación de los derechos electorales y la incorporación de sectores medios y populares al sistema político y conformó una mayoría imbatible. La historia se repetiría, agravada, a partir de 1943, cuando el régimen militar resultante del golpe de ese año se orientó a la adopción de políticas de reforma social, bajo el influjo del entonces coronel Juan D. Perón, que logró de ese modo conformar un amplio movimiento, de base sindical y popular, pero que también incluiría a buena parte de las fuerzas conservadoras remanentes (e incluso a un sector del radicalismo). Tras su victoria electoral en 1946, el peronismo se constituyó en una nueva coalición populista ampliamente mayoritaria, e igualmente incapaz de conformar un sistema estable. El golpe militar de 1955, y la inestabilidad y violencia crecientes de los años que siguieron (con gobiernos semidemocráticos, por la proscripción de Perón, interrumpidos por nuevos golpes de estado), conducirían, en los años setenta, al agravamiento de todos los conflictos facciosos dentro y fuera del peronismo. A todo lo largo de este ciclo de inestabilidad, en el que imperaron el populismo y el intervencionismo militar, las fuerzas de izquierda no tuvieron oportunidades de desarrollar recursos político-institucionales significativos, y mucho menos de hacerlo sobre la base de estrategias autónomas. Aunque ello no significó que no estuvieran presentes, tanto en la vida política como en la actividad cultural y sindical, gracias a ciertos rasgos del desarrollo económico, cultural e institucional del país: la temprana urbanización y modernización capitalista, la conformación de una clase obrera relativamente homogénea y la ausencia de grandes masas campesinas que oficiaran de ejército de reserva, el desarrollo de poderosas instituciones culturales y educativas, un orden constitucional a cuya defensa y fortalecimiento incluso los militares y grupos más autoritarios debieron remitir sus iniciativas.

Gracias a la masiva inmigración europea que había llegado al país a partir de las últimas décadas del siglo XIX, y al rápido crecimiento económico que posibilitó el modelo agroexportador, el socialismo y el comunismo, en menor medida el anarquismo, habían hecho tempranamente pie en el movimiento sindical. Sobre todo en las grandes ciudades de la región pampeana, pero también en las fronteras agrícolas del sur y del norte del país. En los albores del nuevo siglo el socialismo ganó su carta de ciudadanía en las clases medias y sectores ilustrados que imaginaban una Argentina pronto democratizada y socialmente integrada. Sin embargo, la emergencia de la UCR bloqueó el florecimiento electoral que la

izquierda daba entonces por descontado. Para comienzos de los años veinte, la UCR se había consolidado como fuerza mayoritaria en casi todo el país (su bancada, de entre 70 y 90 diputados, se imponía fácilmente a los no más de veinte diputados de los conservadores y las pequeñas fracciones provinciales en que se habían ido desgranando de esa fuerza), mientras que el Partido Socialista había quedado estancado: apenas lograba conquistar entre 15 y 20 bancas en la Capital Federal, ciudades de Buenos Aires y Santa Fe. Junto a los comunistas, todavía mantenía una presencia importante en el sindicalismo, pero sin recursos político-institucionales significativos en sus manos que le permitieran obtener concesiones del Estado y disciplinar a las organizaciones gremiales, iría retrocediendo también en ese frente: en los años finales de la década se consolidaría en las organizaciones obreras una corriente denominada “sindicalista”, que gracias a su independencia partidaria logró ventajas en la negociación con los gobiernos radicales, cuyo objetivo fue, precisamente, debilitar al activismo gremial de izquierda a través de la combinación de represión y oportunas concesiones a los más dóciles. De este modo, si bien la UCR no lograría una presencia propia en los sindicatos, pudo hacerle cada vez más difíciles las cosas a socialistas y comunistas.

La frustración de las expectativas que la izquierda había depositado en la supuesta relación directa entre su futuro y el desarrollo político, económico y cultural del país (expectativa que reflejaba, además del propio optimismo ingenuo y mecánico, la no menos ingenua ilusión de progreso indefinido que configuraba el sentido común básico de las elites argentinas de ese tiempo) se reflejó en el grave cisma que sufrió el socialismo en 1927: los sectores centristas del partido, con base en las clases medias de Buenos Aires, formaron el Partido Socialista Independiente que, arrastrando tras de sí a buena parte de los diputados de la fuerza, intentó acercarse a los conservadores, en el entendimiento de que no era posible plantear una oposición autónoma a la UCR. Fue la primera de una larga serie de dilemáticas alternativas entre autonomía y colaboración a que se enfrentarían las izquierdas argentinas. Sin embargo, con el golpe de 1930 este cisma perdería en gran medida sentido, ya que todos los socialistas se enfrentarían al nuevo dilema planteado por la proscripción de los radicales y la práctica del fraude (Ciria, 1975). Si bien en ocasiones ello los beneficiaría (en 1931, en alianza con el PDP, fracción del tronco conservador, logró 43 diputados y 2 senadores, una *performance* que jamás repitió), deslegitimaría su posición institucional y alentaría a los votantes que aspiraba a representar a optar por los radicales allí donde se les permitió participar (es así que hasta 1942 los socialistas porteños no volvieron a ganar).

¿Cuál era en concreto el problema que enfrentaban los socialistas y la izquierda en general? Habían quedado atrapados entre la competencia insuperable que le planteaba una fuerza populista (el radicalismo), y la connivencia con gobiernos militares y políticos conservadores que ponía en serios aprietos su ideario democrático e igualitario. Durante la etapa posterior al golpe, los comunistas, que habían roto con el PS en 1918, intentaron escapar de esta encerrona convocando a un frente democrático antifascista y endureciendo las demandas gremiales. Pero el escaso resultado de estas iniciativas los llevó a enfrentar el mismo dilema, bajo otra forma: ¿debían colaborar con los radicales proscriptos, en nombre de la limpieza electoral, o con los socialistas, con vistas a fortalecer la unidad obrera?

Un problema equivalente y aun más agudo se planteó desde 1943. Como dijimos, el nuevo golpe militar dio paso a un gobierno que, bajo el influjo de Perón y otros oficiales animados de ideas corporativas y nacionalistas, inició reformas sociales que le permitieron ganarse el apoyo de muchos gremialistas (no sólo de orientación sindicalista, también socialistas resentidos con la dirigencia del PS, e incluso algunos comunistas). Reclamos por

los que socialistas y comunistas habían batallado durante años, como el reconocimiento legal de los gremios, la ley de contratos de trabajo, el estatuto del peón rural, etc., fueron concedidos por Perón de un día para otro. Cuando los partidos de izquierda se enrolaron, de cara a las elecciones de 1946, en la Unión Democrática, junto a conservadores y radicales, para enfrentar a lo que entendían era la versión argentina del fascismo, la “vieja guardia” sindical abandonó a los partidos de izquierda y se integró al peronismo (Torre, 1990), confluyendo con expresiones no menos heterogéneas que las que conformaban el frente opositor (el movimiento se nutrió, en las provincias, de dirigentes y votantes provenientes del conservadurismo y el radicalismo, y en las periferias de las grandes ciudades, de votos genéricamente “populares”). La década de gobiernos peronistas que siguió a esa elección (Perón sería reelecto, por amplio margen, en 1952), abrió un abismo perdurable entre los partidos de izquierda y los sindicatos y sectores populares en general. Para comienzos de los años cincuenta, la presencia de socialistas y comunistas en la vida gremial era ya marginal, y electoralmente el socialismo había alcanzado una completa irrelevancia.

La polarización entre peronismo y antiperonismo extremaba la paradójica situación vivida por la izquierda en los años treinta. En primer lugar, porque ahora el campo sindical casi en su totalidad fue ganado por la seducción populista (el peronismo no sólo fue generoso en concesiones laborales, sino que alentó la formación de una poderosa estructura gremial ligada al Estado). Y, en segundo lugar, porque el polo antiperonista quedó prontamente signado por la influencia de ideas y orientaciones antidemocráticas y antiigualitarias. Las denuncias de los socialistas y comunistas contra el “filofascismo” del régimen quedaban entonces desteñidas por el tono inconfundiblemente clasista y reaccionario de las críticas que le dirigían a Perón los referentes más destacados del antiperonismo (Halperín Donghi, 1991). Todo ello habría de cristalizarse con el golpe militar de 1955 y los sucesos posteriores. Los jefes militares que tomaron el control de la situación tras enviar a Perón al exilio se propusieron restaurar las condiciones previas a su aparición en escena, algo a todas luces imposible. Lo que lograron fue abroquelar a los sectores sindicales y populares en la lealtad al líder. Las ganancias que obtuvieron los socialistas gracias al apoyo oficial a la formación de nuevos “sindicatos libres” serían más que compensadas por el desprestigio que significó avalar la persecución de la “resistencia peronista” y el atropello de las garantías constitucionales en cuyo nombre decían actuar contra el “tirano prófugo”. Tampoco los comunistas lograron gran cosa solidarizándose con los perseguidos. Por otro lado, en el socialismo la situación creada tras el golpe de 1955 no hizo sino agravar las tendencias a la fragmentación. Mientras la conducción del partido, ahora denominado PSD, reincidía en las estrategias electorales intentadas en los años treinta, con menos éxito que entonces (apenas logró 5 diputados en 1963, pues sus candidatos fueron superados en casi todos los distritos por los radicales, favoritos de las clases medias), un sector minoritario fundó el Partido Socialista Argentino e inició un giro hacia posiciones más extremas. Posteriormente, también el PSA se descompondría: un sector terminaría confluyendo con el trotskismo y el maoísmo, nutriendo varias de las organizaciones guerrilleras y revolucionarias que florecieron en los años sesenta; mientras que otros revisaron sus “prejuicios antipopulistas” y se sumaron igual que muchos comunistas al movimiento juvenil que, a fines de esa década, como ala izquierda de la resistencia peronista, experimentaría una expansión y radicalización acelerada.

De este modo, durante el ciclo de enfrentamiento entre peronistas y antiperonistas y de mayor inestabilidad política (al golpe de 1955 le siguieron los de 1962, 1966 y 1976), la izquierda quedó atrapada en una opción de hierro, que nuevamente volvió inviable el

desarrollo de una estrategia autónoma con bases institucionales sólidas: o bien se plegaba al movimiento populista que estaba dando cauce y alimentando la radicalización de las masas, resignándose al seguidismo minoritario de un proyecto político que tarde o temprano la rechazaría, o bien se planteaba alguna forma de diferenciación y competencia con el populismo, y quedaba entonces inscripta en un campo dominado por estrategias que no podían ocultar su al menos ambigua posición frente al hecho electoral. El no poder superar este dilema condujo a las izquierdas, en particular a la militancia juvenil, que en sindicatos, universidades y otros frentes de masas logró entre fines de los sesenta y principios de los setenta un protagonismo que le había sido negado durante décadas, a compartir la encerrona en que el conjunto del movimiento popular cayó con el regreso de Perón al poder en 1973 y su muerte al año siguiente. El peronismo se convirtió entonces en territorio de una batalla sin cuartel entre grupos armados de izquierda y de derecha, dándose inicio al Terrorismo de Estado que se habría de extender e intensificar hasta el exterminio con el golpe de 1976. La aniquilación física de buena parte de los militantes y dirigentes de izquierda, tanto de los que habían hecho suya la lucha armada como de los que habían intentado otros caminos, vino a coronar un drama que encerraba en última instancia las claves de una previa e inapelable derrota sufrida por esa generación: los sectores populares, mucho más las clases medias, estuvieron indispuestos a acompañar a las izquierdas en sus afanes revolucionarios que, en manos del peronismo, sólo habían sido un útil recurso para lograr el regreso al poder, y ahora eran una amenaza a suprimir (Novaro y Palermo, 2003).

Si bien es indiscutible el objetivo de los militares de 1976 de terminar con lo que llamaban “el caldo de cultivo de la subversión” en la sociedad, el populismo, de manera de disciplinar a los actores populares, en particular a los sindicatos, no lo es tanto cuál fue el saldo de la dictadura en este terreno, ni en qué medida su desmoronamiento abrió nuevas perspectivas para las izquierdas. Por lo general, en los análisis sobre este tema se otorga una enorme importancia a la destrucción de las organizaciones revolucionarias y al impacto de la crisis económica y la desindustrialización sobre la capacidad de presión sindical y su articulación con otros actores sociales. Los cambios registrados en el sistema institucional y en la escena pública suelen ser subestimados o tomados como reflejo mecánico de aquello.

La cuestión es más compleja. Lo cierto es que la reinstauración de la democracia en 1983 significó al mismo tiempo una continuidad y la apertura de un nuevo horizonte en esta historia de acorralamientos e inviabilidades padecida por la izquierda. La derrota del peronismo en las elecciones de ese año a manos de Raúl Alfonsín, candidato de la UCR, por primera vez en la historia de esa fuerza, significó una limitación del peso del populismo en la vida política argentina, y la creación de condiciones mínimas para asegurar la estabilidad de las instituciones democráticas. Por primera vez en décadas se estructuraba un régimen de partidos que parecía no estar amenazado de muerte ni por el golpismo militar ni por el hegemonismo, a la postre más conflictivo que efectivo, de un movimiento. Ese podía ser terreno propicio para que la izquierda fortaleciera sus organizaciones y ganara espacio en los sectores populares. Pero el resultado electoral indicó también el fortalecimiento del bipartidismo radical-peronista. A la vez que el control de éste último sobre los sindicatos se beneficiaba de la continuidad de sus recursos institucionales y corporativos y la extirpación del gremialismo de izquierda realizada por la dictadura militar. Es así que en los primeros años de las fuerzas de izquierda sólo una, el Partido Intransigente (heredero de una fracción escindida del radicalismo y nutrido por grupos sobrevivientes de las organizaciones revolucionarias de los setenta) conquistó una mínima representación parlamentaria (con el 2,8% de los votos a nivel nacional recibió 3 diputaciones en 1983 y sumó 5 más en 1985

con el 6%). Entre el PC, los socialismos (el PSD y el Socialista Popular), y los grupos trostkistas sumaron poco más del 2% del total en la primera elección y el 4% dos años después. Dado este panorama, se entiende que para los militantes y votantes de izquierda siguiera siendo más tentador participar de alguna corriente progresista de los grandes partidos que resignarse a un papel testimonial a través de fuerzas insignificantes. Lo que era a su vez estimulado por la buena recepción que las ideas genéricamente “de izquierda” volvieron a tener en las fuerzas tradicionales: el distribucionismo inflacionario, la responsabilidad del Estado en la educación, la salud y demás servicios sociales y la defensa de la soberanía nacional estuvieron entre las metas cuya titularidad y capacidad para hacer realidad radicales y peronistas se disputaron con ansia. La novedad en esta situación sería que a las premisas tradicionales del populismo en asuntos económicos, sociales e internacionales se adosó una preocupación republicana, alentada por el alfonsinismo, por la vigencia de las instituciones liberal-democráticas, el pluralismo y los derechos individuales. En particular estos últimos, que a la luz de las violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura, se erigieron en principio rector del nuevo régimen. Otro tanto sucedió con las izquierdas, que se concibieron como guardianas auténticas de todo ello, frente a las inconsistencias de los grandes partidos, haciendo a un lado disimuladamente concepciones francamente hostiles, o al menos indiferentes, frente a esos valores.

La crisis del gobierno de Alfonsín, fruto de las dificultades económicas y el freno a los juicios por la represión ilegal, permitió que estas fuerzas ganaran algo más de presencia a partir de 1987: ese año, en las elecciones de renovación parlamentaria, el PI obtuvo una decena de bancas y la Unidad Socialista, reuniendo a dos de las ramas del histórico PS, un diputado. Pero fue principalmente el peronismo el que capitalizó los apoyos que perdía la UCR, y ello obligó una vez más a la izquierda, en particular al PI, a optar entre las dos opciones dilemáticas conocidas: intentar una estrategia de diferenciación frente al populismo peronista, o bien aliarse con él a cambio de una cuota de representación y la posibilidad de “atraerlo hacia la izquierda”. Sucedió que, enfrentado a este dilema, el PI se fracturó: cuando la mayor parte de su conducción optó por la segunda opción, sus militantes y buena parte de sus votantes se dispersaron entre las restantes expresiones de izquierda (lo que permitió a Izquierda Unida, frente liderado por el PC, obtener en 1989 su primera banca de diputado). Así los noventa se inician, para la izquierda, bajo signos conocidos y poco alentadores. Aunque las reformas de de mercado de Menem cambiarían muy pronto el panorama, al someter la economía y la política a nuevos desafíos y debates.

Para ingresar a esta nueva etapa conviene detenerse todavía en lo que el primer turno democrático significó para los partidos argentinos. La apuesta de Alfonsín había consistido en extraer del peronismo histórico todos sus componentes sociales e ideológicos “progresistas”, para decantar los autoritarios y de derecha. Convertir a la UCR en la socialdemocracia argentina resultó tan difícil como dividir al PJ. Aunque, como beneficio colateral de su proclama neoliberal, Menem daría ocasión a Alfonsín y a muchos otros de seguir creyendo que algo de eso era posible. Lo cierto es que el peronismo triunfó en las elecciones de 1987 (y las subsiguientes) conviviendo, por primera vez, con un régimen institucional plenamente legitimado. Ello le impondría limitaciones al abuso del principio mayoritario, pero al mismo tiempo potenciaría la eficacia de su liderazgo, de sus recursos electorales y corporativos. Con los que demostraría que él y sólo él podía gobernar la Argentina, en particular en una situación de crisis. Así se comprobaría, de paso, para desazón de la crítica al populismo más esquemática y más difundida entre los intelectuales de izquierda, que su preponderancia no se basaba en un mero intercambio entre favores por

votos, sino en una compleja construcción cultural, institucional y sobre todo política, que podía sobrevivir a penurias económicas y aún a una gestión con expresas restricciones distributivas. Fue así que el menemismo implicó, a la vez, una oportunidad para la construcción de una izquierda autónoma, al asociar al peronismo a la derecha liberal en lo económico y regresiva en lo social y cultural, y la reedición de un viejo desafío, dado que siguió captando el grueso del voto popular. Por lo mismo, impuso a la democracia argentina en su conjunto una dura evidencia sobre los límites de su capacidad para innovar, tenida por muy amplia durante la transición: las vías de su consolidación no discurrirían tanto por lo que ella fuera capaz de reformular y redefinir del peronismo, cuanto por lo que éste pudiera y quisiera hacer con los valores y principios de aquella.

2. La izquierda frente al menemismo: virtudes y limitaciones del Frepaso

La desordenada retirada del gobierno de Alfonsín, a que lo obligó la hiperinflación de 1989, y, sobre todo, la puesta en marcha de las reformas de mercado por parte de su sucesor, Carlos Menem, crearon condiciones inesperadamente favorables para las fuerzas de izquierda. En particular para una opción que fuera capaz de recoger las "promesas incumplidas" por los partidos tradicionales desde 1983. Esta fue la apuesta de los dirigentes que, provenientes algunos de los grandes partidos, encabezando otras pequeñas fuerzas de izquierda y centroizquierda, u organizaciones sociales o sindicales, conformaron el Frente Grande en 1993 y el FREPASO a fines de 1994: aspiraban a desafiar, con una propuesta difusamente progresista el bipartidismo. Ahora bien; entre las promesas incumplidas de las fuerzas tradicionales estaban tanto las de carácter democrático y republicano, lucha contra la corrupción y el abuso de poder, como las tradicionales populistas: la centroizquierda se haría en esos términos eco de demandas de distribución, defensa de la soberanía nacional frente a las privatizaciones y protección estatal al pleno empleo y demás demandas sociales.

En las presidenciales de 1995 el FREPASO, que incluía ya a la Unidad Socialista, alcanzó el segundo puesto con el 29 % de los votos (y una bancada de 25 diputados). Esos resultados no tenían precedentes para una fuerza de esta orientación desde que comenzara el declive del socialismo en los años treinta. Ellos se explican en gran medida por efecto de la difundida idea de que el peronismo, bajo la égida de Menem, había perdido para siempre sus componentes populistas, progresistas o "populares" y se había convertido en una fuerza neoconservadora, por lo que nada bueno podía esperarse de él; mientras los radicales por su lado habían quedado sumidos en el desasosiego y la impotencia frente a un gobierno que avanzaba en reformas que muchos habrían querido hacer y otros repudiaban.

El mayor mérito del FREPASO, y en particular de su mentor, Carlos Álvarez, que le permitió hilar las señas de reconocimiento de un progresismo disperso y muy heterogéneo fue su ambiguo posicionamiento frente a esas reformas. Gracias a él pudo a la vez recoger el apoyo de quienes desde una tradición nacional-populista las consideraban la quintaesencia de la entrega y la exclusión social, y los moderados que objetaban "errores de implementación", el acento antiestatista, el hegemonismo o el patrimonialismo corrupto. Con el tiempo estas posiciones moderadas resultaron electoralmente más redituables y por tanto ocuparon un lugar más destacado. Pero ello no bastó para resolver las ambigüedades del discurso y la estrategia. En gran medida porque la moderación de la crítica económica buscaría ser compensada con una crítica cada vez más furibunda a la corrupción, los perjuicios institucionales que acarrearía la gestión menemista, canalizado todo ello en un repudio *qualunquista* y movimientista de los mecanismos partidarios (Abal Medina, 2006).

A estos problemas se agregó el hecho de que el rápido crecimiento electoral tampoco resolvió por sí mismo las debilidades organizativas del frente: carecía de una estructura de alcance nacional y de recursos humanos en número y calidad suficiente para desempeñar los muchos cargos de representación que comenzó a ocupar desde 1994; salvo en la Ciudad de Buenos Aires, su distrito más fuerte, no existía un mecanismo interno de participación y toma de decisiones aceptado por todas las corrientes y agrupaciones. La heterogeneidad de las mismas agravaba la situación: algunas consistían en grupos de militantes; otras eran redes de “punteros” que controlaban “paquetes” de afiliados; las había también basadas más o menos directamente en organizaciones sindicales; otras más, en cambio, se fundaban en la popularidad de algunos de los líderes o de figuras secundarias, sin bases organizadas de afiliados o militantes. Una presencia muy desigual en los distritos de cada uno de esos grupos y del FREPASO en su conjunto terminaba de complicar las cosas: en 1995 ganó en Capital Federal, ocupó el segundo lugar en dos provincias importantes como Buenos Aires y Santa Fe, pero quedó relegado a un lejano tercer lugar en la mayor parte de los distritos del interior; los sectores que eran fuertes en algunos distritos (por ejemplo los socialistas en Santa Fe, los grupos de origen sindical en la provincia de Buenos Aires), carecían de toda presencia en otros, de modo que era muy dificultoso establecer reglas de juego compartidas (para negociar acuerdos o para realizar elecciones internas) y hacerlas cumplir en todo el país. La combinación de disensos internos y fragmentación y labilidad organizativa resultaría explosiva para la autoridad de los líderes y la cohesión del frente al momento de tener que administrar una crisis económica de proporciones. En ese momento el FREPASO dejaría de funcionar como una exitosa marca electoral, y fracasaría como fuerza política.

La atención casi exclusiva puesta en el aprovechamiento de las oportunidades que ofrecía la coyuntura electoral sin duda cumplió un papel en ese fracaso. Pero conviene aclarar que todo ello se siguió, más que de un error, de una larga y valorada tradición: enfrentados a la opción de aprovechar una oportunidad que bien podía no repetirse, o dedicar esfuerzos y recursos, que seguramente tardarían en fructificar, a la construcción de una más sólida y eficaz estructura partidaria y consensos más sólidos entre las bases de apoyo y en la sociedad, para lo cual deberían vencerse las esperables resistencias de las estructuras existentes, y de los que no estaba claro qué ventaja se derivaría (tal como enseñaba, a los ojos de los líderes frentistas, la experiencia de radicales y peronistas) ellos optaron por la primera alternativa. Y al hacerlo se convencieron de que no estaban simplemente “saliendo del paso”, ni “quemando etapas”, sino que recorrían un camino lleno de ventajas y sin obstáculos. Se imaginaron evitando los costos que siempre supone actuar dentro de una organización, reteniendo una amplia autonomía para conducir y fortalecer el movimiento de opinión que los respaldaba. Y concibieron al FREPASO, como expresión de un movimiento ciudadano que venía a impugnar las prácticas oligárquicas de los viejos partidos. De allí la exaltación del movimientismo y el consecuente desprecio por los recursos que supuestamente proveían las “tradicionales” instituciones partidarias. En síntesis, éstas eran, para la idiosincracia frentista, la esencia de la “vieja política” que el FREPASO venía a combatir, y por lo tanto no debía imitar. Aunque la crisis final de los partidos tradicionales finalmente no se produciría, la evocación de una “nueva política” de carácter “transversal” ayudaría a que se desatendieran los problemas asociados a la informalidad y la falta de disciplina y cohesión internas. Y, por sobre todo, ayudaría a mantener viva una promesa populista muy redituable dado el escaso prestigio de los partidos, la que oponía los intereses y pasiones políticas de un pueblo esencialmente

democrático y justo, a las mezquindades de las elites y sus opacos procedimientos. Como dijimos, la tendencia de los líderes del frente a moderar y modernizar sus posicionamientos económicos reforzó más que debilitó ese fervor movimientista en lo político e institucional.

En el manejo coyunturalista de la organización y los consensos internos tuvo un peso importante también la presencia de sindicatos que, en forma más o menos orgánica según los casos, se habían integrado al frente. Provenían del Congreso de los Trabajadores Argentinos (CTA), la primer central sindical creada fuera del campo peronista desde los años sesenta, que se nutrió de organizaciones, dirigentes y militantes gremiales opuestos a las reformas de mercado de Menem y en busca de un nuevo proyecto partidario. Su actividad reivindicativa contribuyó grandemente, sobre todo desde mediados de los noventa, a crear el espacio político adecuado para el florecimiento frentista, poniendo en cuestión la representación peronista de los trabajadores. Pero al mismo tiempo su presencia supuso un problema para los líderes del FG y el FREPASO; ya que esos sindicatos (de empleados públicos, maestros, algunos sectores industriales y de servicios afectados por las privatizaciones, etc.), tenían una capacidad de movilización infinitamente mayor que la del resto de los núcleos que se integraron a la fuerza, de manera que permitirles usarla hubiera significado convertirlos en sus grandes electores internos. La informalidad organizativa de la vida interna, y la toma de distancia respecto de las protestas y planteos del CTA, fueron una solución, en principio sencilla y con bajos costos, ante estos peligros.

Con todo, la crisis del menemismo ofreció en la segunda mitad de los noventa el terreno adecuado para, si no resolver, al menos disimular estas muchas dificultades. Fue en estas circunstancias que, en agosto de 1997, la UCR y el FREPASO decidieron formar la Alianza por el Trabajo, la Justicia y la Educación, con la que lograron poner fin, en las parlamentarias de octubre de ese año, a la serie ininterrumpida de victorias electorales que venía acumulando el peronismo desde 1987. ¿Permitiría la formación de la Alianza superar las dificultades que, por separado, agobiaban a los partidos opositores?

Ante todo, el radicalismo, tan dividido internamente como el FREPASO, contaba con menos unidad aún en su vértice: el partido seguía estando bajo la hegemonía de Alfonsín, pese a que por los reveses experimentados por su gobierno, primero, y por sus tácticas de oposición y colaboración frente al menemismo, estaba inhabilitado como candidato. Por ello aceptó la postulación de Fernando De la Rúa, quien había ganado la jefatura del gobierno porteño y lideraba los sectores más conservadores y económicamente ortodoxos del partido, al tiempo que sus avances en el frente interno. Y esta marcada fragmentación de las fuerzas aliadas se replicó en la coalición, dado que la colaboración entre ellas se enraizó muy desigualmente en los distritos y en sus distintas facciones. En una decena de provincias la Alianza no se concretó para las elecciones de 1997, y no en todos los casos se concretaría para las de dos años después. Mientras la coalición brindara ventajas electorales y acceso a espacios institucionales superiores a los que cada parte podría aspirar a alcanzar por separado, era de esperar que se impusiera la cooperación. Pero sólo a nivel nacional o en los distritos donde ello se verificase. En tanto, los radicales seguirían cultivando su autonomía en las provincias que consideraban santuarios propios y concibiendo en su fuero íntimo a la Alianza apenas como un subterfugio para recuperar la cohesión y fortaleza electoral perdidas en el plano nacional desde el declive de Alfonsín. Por su parte, para los frepasistas era imprescindible proveerse de los recursos territoriales y organizativos de los que carecían, en función del nuevo salto electoral que se disponían a dar en la lucha contra la “vieja política” partidocrática: la Alianza no era, por tanto, sino otro paso en su lucha contra la oligarquía partidista. De lo que terminó resultando una

dinámica de colaboración parcial y acotada, gracias a la cual cada uno de los aliados pudo seguir haciendo lo que sus limitados recursos le permitía, no más. Así, a través de la complementación de sus recursos, ambos podrían superar sus respectivos “cuellos de botella” para sacar un máximo provecho de la oportunidad que les brindaba la coyuntura.

Problemas aún mayores provinieron de la debilidad de los liderazgos. Debido a las internas abiertas en que se resolvió la fórmula presidencial, que integrarían De la Rúa y Álvarez, proceso que para colmo insumió casi todos los esfuerzos y recursos de los aliados durante 1988, las posibilidades de que desde el vértice de los partidos se pudiera imprimir una dinámica superadora de los déficits de la coalición quedaron aún más lejanas. De la Rúa encarnaba mal las modestas expectativas de cambio que la Alianza había sabido despertar en la ciudadanía, y era visto con tanto recelo en el frente como en la propia UCR. No ocultó su displacer por tener que convivir con alfonsinistas y frepasistas, y tendió a conformar un círculo de fieles reducido y de limitada eficacia para disciplinar a la coalición detrás suyo. Álvarez, por su parte intentaría sacar provecho de su condición de interlocutor privilegiado del futuro presidente, pero encontraría bien pronto que poco podía ganar en la interna radical, en la que finalmente primaba el patriotismo partidario, y en cambio mucho y muy rápido perdía de su prestigio ganado como líder de opinión, ajeno a compromisos interpartidarios opacos, entre sus seguidores y sus más devotos votantes.

Mucho antes que estallara un conflicto entre el conservadurismo de De la Rúa y el centroizquierdismo de Alvarez, la coalición ya había fallado en crear condiciones para la gestión de gobierno. La experiencia de coaliciones exitosas en Brasil y Chile nos habla de mecanismos imprescindibles para su funcionamiento, difíciles de construir y preservar (Figueiredo y Limongi, 1999; Siavelis, 2001): una delicada ingeniería parlamentaria y del gabinete, una ajustada relación entre funcionarios de gobierno y dirigentes partidarios, que permita prevenir conflictos, debatir conjuntamente las políticas de gobierno que se pondrán en marcha en las áreas clave, así como distribuir responsabilidades y articular equipos conjuntos en la gestión. Y, por sobre todo, una fuerte disciplina en los partidos y su encolumnamiento detrás de líderes que, sean más o menos capaces y autosuficientes, deben tener en claro sus atribuciones y responsabilidades. Cuestiones éstas a las que aquí debería dedicarse aún más tiempo y esfuerzo dado que se trataba de aliados muy recientes y con claras tendencias a la fragmentación y la indisciplina interna. Dado que, además, la Alianza había hecho de la conquista del “buen gobierno” una pieza esencial de su estrategia para introducir cambios en la herencia menemista, la resolución de estos problemas coalicionales (que eran a la vez políticos, organizativos y técnicos) revestía una prioridad absoluta, que estuvo lejos de corresponderse con los recursos que a ella se destinaron.

En la campaña presidencial, la Alianza continuó la estrategia del FREPASO de marcar su diferencia con el oficialismo en el problema de la corrupción. Con poco más que esto, frente a un peronismo que no había resuelto la sucesión del liderazgo, bastó para conquistar la presidencia. Pero la Alianza consiguió poco más que eso en las elecciones de 1999: la victoria a nivel nacional se logró con los mismos votos que en las parlamentarias de 1997, con caídas en algunas elecciones provinciales; de modo que en el PJ sólo su candidato, Eduardo Duhalde debió reconocerse derrotado, y la distribución del resto de los espacios institucionales y de poder no se alteró significativamente: en Diputados la Alianza le arrebató la mayoría al peronismo, pero por un margen demasiado estrecho como para garantizarse *quorum* propio; el Senado no cambió su composición y el cuadro en las provincias fue francamente desfavorable para la coalición, con sólo seis gobernaciones, parcialmente una séptima y la ciudad de Buenos Aires, mientras que el peronismo

gobernaría 14 distritos, incluyendo tres decisivos, Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba. En suma, la Alianza tendría que lidiar con una fuerza de oposición potente a pesar de la derrota. Capaz de frenar o al menos condicionar políticas que requirieran aprobación parlamentaria y el consenso de las provincias.

Esta situación de “empate” en un contexto de crisis, si por un lado exigía demasiado a los estilos de liderazgo y los patrones tradicionales de comportamiento de los partidos argentinos, por otro ofrecía muy poco en términos de las políticas que hacía posible implementar. En particular en el terreno fiscal y macroeconómico, donde la recesión imponía condiciones muy duras a toda negociación, y en el de las reformas institucionales, que eran tan esenciales al *ethos* aliancista como irritativas para los peronistas y costosas en términos financieros y de recursos políticos. Para colmo, el peronismo perdió del todo su cohesión, lo que bloqueó cualquier posibilidad de llegar a un acuerdo amplio. Aunque para la Alianza no era tan grave esta pérdida de cohesión del peronismo como el alivio que éste había experimentado con los resultados electorales que cerraron la década menemista: ellos mostraron, contra la apuesta que animaba al FREPASO desde su fundación, que la lealtad electoral de las bases peronistas seguía viva pese a las reformas de mercado, y que los candidatos del PJ, en esta nueva etapa que se abría, podían ser los más críticos de esas reformas y ser apoyados por sus principales víctimas, y a la vez seguir atribuyéndose el mérito por las ventajas derivadas de su concreción, y poco podían hacer para evitarlo sus competidores, fueran de izquierda, de centro o de derecha.

Lo que terminaba de complicar las cosas era el modo en que se combinaba esta inesperada persistencia del populismo peronista con la tensión, que la propia Alianza había ayudado a instalar, entre las expectativas de distribución y las posibilidades que ofrecía la coyuntura. La opinión pública y buena parte de las elites entendían el fin del menemismo como el de una larga etapa signada por los ajustes ortodoxos y la apertura de un tiempo de crecimiento y distribución; lo que opacaba los rasgos distributivos de las reformas y de la convertibilidad (gasto público financiado con deuda, salarios elevados en dólares, aliento al consumo más que a la inversión, etc.), así como el hecho de que se estaban agotando las posibilidades de financiarlos, lo que impondría, a la larga o a la corta, un más completo ajuste fiscal y de los precios relativos, que indefectiblemente afectaría los salarios.

El colapso de la Alianza y sus complejas lecciones para la izquierda

Todos estos factores se combinaron en forma explosiva en la crisis política desatada en agosto de 2000 a raíz de la denuncia periodística del pago de sobornos que habrían hecho funcionarios de gobierno a senadores nacionales, tanto del PJ como de la UCR, para lograr la aprobación de la reforma laboral, concretada en abril. Dicha crisis terminó enfrentando a Álvarez, transformado en máximo impulsor de la investigación y de los pedidos de renuncia a los implicados en el Senado y el Ejecutivo, con el presidente, que primero desestimó y luego buscó acotar el escándalo por vía judicial. Álvarez renunció a la vicepresidencia y la coalición quedó al borde de la ruptura. Pese a varios intentos postreros de relanzamiento, la Alianza ya no existía como coalición de gobierno. Lo que quedó en evidencia cuando, en marzo de 2001, varios de los funcionarios del FREPASO que permanecían en el Ejecutivo renunciaron, en disidencia con nuevas medidas de ajuste, y cuando fracasó el intento de Álvarez de volver al Ejecutivo de la mano de Domingo Cavallo, designado en Economía por De la Rúa como última carta para mantener en pie la convertibilidad. Poco después Álvarez renunció a la conducción de su propia fuerza, que se

descompondría en distintos grupos opositores. El fin de la Alianza coincidió así con el del frente de centroizquierda.

En el fracaso del gobierno de la Alianza y de la estrategia de coalición desarrollada por el FREPASO pesaron sin duda errores de diagnóstico sobre la crisis económica, así como déficits organizacionales y de liderazgo. Fueron mucho menos relevantes, en cambio, las disidencias programáticas e ideológicas. Tanto la corrupción como el ajuste fueron tema de polémica interna, pero se volvieron cuestiones realmente conflictivas sólo a partir de que los intentos consensuados por seguir un curso moderado de acción no dieron los resultados esperados. Y cuando así sucedió, más que en una oposición entre conservadores y centroizquierdistas, los disensos internos se expresaron en términos de equívocos populistas. Ello se revela en la forma en que sectores críticos del FREPASO y la UCR enfrentaron las primeras medidas de ajuste: dando por hecho que era posible mejorar los rendimientos de la convertibilidad o “cambiar de modelo” sin costos, sin mayores impuestos, conflictos con asalariados y empresarios, etc.. Por otro, en el cariz que adquirió la “reforma política” para el FREPASO: una lucha entre la política de partidos y una nueva, movimientista, transparente y por tanto naturalmente popular. Pero, sobre todo, la persistencia populista se evidenció en un peronismo que no había cambiado tanto como los críticos del menemismo habían supuesto y que mostró poder volver a imponer un juego imposible a sus adversarios usando sus imbatibles recursos institucionales: forzándolos a administrar la convertibilidad sin déficit y sin afectar los intereses sindicales, provinciales e incluso empresarios que había prohijado y por cuya salud seguiría velando. Cómodamente apoltronado en las provincias y las bancadas parlamentarias, los dirigentes peronistas no dudaron en calificar las medidas de ajuste como “injustas e innecesarias”, coincidiendo ahora con los gremios, incluidos los del CTA. La capacidad del peronismo de echar mano de la tradición y recuperar representatividad entre los sectores sindicales y populares mostraba cuán limitado, y hasta cierto punto efímero, había sido el acotamiento del abanico populista que le había permitido al FREPASO florecer en los noventa. De modo que, una vez más, la centroizquierda quedó atrapada entre dos opciones indeseables, que terminarían siendo además inviables: o se comprometía a fondo en la administración de la crisis, y entonces se resignaba a perder más y más apoyos a manos de la izquierda y el peronismo hasta tanto se completara el ajuste y comenzara a revertirse la crisis; o bien abandonaba el gobierno para competir con éstos por el rol de “oposición contra el ajuste”. Las apuestas postreras de Álvarez, como apoyar el ingreso de Cavallo, fueron desesperados intentos de resolver ese dilema. Aunque, en tanto no superaron los equívocos en que seguía empantanada la Alianza no hallaron una salida.

Parte del problema del FREPASO consistió en que en su acelerado paso de la marginalidad electoral de principios de los noventa, al gobierno, hizo considerables sacrificios en términos de identidad y no logró adquirir una mínima inserción institucional que le permitiera absorber los costos de una mala gestión. La estrategia de Álvarez había sido “quemar las naves” en términos de adaptación coyuntural de su programa y política de alianzas, sin construir ningún baluarte en gobiernos locales y provinciales donde buscar refugio en caso de que la aventura no diera los resultados esperados. Muchas de las explicaciones críticas sobre su suerte se han basado en la supuesta carencia de un programa realmente alternativo, es decir, destacan el pecado de la moderación (Fazio et al, 2001; Jozami, 2004). Su apuesta por desplazar a Menem y el peronismo del poder en 1999, en las condiciones de un régimen de convertibilidad que contaba con amplísima adhesión en la sociedad, y que casi todos los actores económicos relevantes consideraban “perfectible”

pero imprescindible, determinaba que la moderación no fuera una opción entre otras sino una exigencia parametral. Cuando el diagnóstico sobre la crisis se volvió más realista, y alarmante, siguió primando la idea de que el frente podría sobrevivir a un gobierno mediocre, pero no a una ruptura de la convertibilidad o un *default* de la deuda: los costos sociales inmediatos de esas medidas (recesión, caída del empleo, de los ingresos públicos, etc.), se estimaron, con razón, políticamente insostenibles. Dadas las debilidades internas y coalicionales y el desafío de una oposición peronista poderosa y poco colaborativa, no era factible aguantar el chubasco de una crisis general hasta la eventual recuperación.

La experiencia de la centroizquierda en otras latitudes demuestra que su disposición a entrar en coalición con fuerzas de centro e incluso de centroderecha, el acento puesto en la equidad y las oportunidades más que en la igualdad de títulos, la atención prestada a los problemas de la competitividad y la estabilidad macroeconómica, etc., inevitablemente la llevan a enfrentarse a la izquierda. Sólo que ese enfrentamiento es más costoso cuando la centroizquierda tiene un déficit de identidad y de enraizamiento en las instituciones y en la sociedad, y obviamente más aún cuando los resultados de las políticas son malos, o escasos. En Argentina, el Frepaso no había desarrollado raíces sólidas en el movimiento sindical, y tampoco encontró movimientos sociales alternativos disponibles en los que asentarse. Por otro lado, se han destacado ya en muchos análisis las dificultades que surgen del intento de basar nuevas fuerzas políticas en los movimientos de opinión, orientados por ánimos antipolíticos y antipartidarios. Los llamados a hacer una “nueva política” distinta de la de los actores tradicionales tienden a quedar prisioneros de los ánimos de que se alimentan: en la condena de las “prácticas clientelistas y oligárquicas de los partidos” se confunde la corrupción con las imprescindibles tareas de mediación que son siempre opacas y exigen profesionalismo y reserva (Mocca, 2002). Con lo que quienes agitan esos ánimos terminan colaborando a desprestigiarse a sí mismos como opción partidaria. A su vez, aun contando con el respaldo de un amplio movimiento de opinión, o vínculos con grupos sociales o culturales formadores de opinión, es difícil contrapesar con ellos a actores con mayor capacidad de presión, como son los sindicatos y los empresarios: éstos son mucho más estables y están mucho mejor organizados, de manera que aunque no sirvan para ganar elecciones, son enormemente útiles para gobernar, lo inverso de lo que sucede con aquellos. Así, una estrategia de acumulación casi exclusivamente asentada en el favor de la opinión pública terminó revelándose demasiado frágil frente a los humores de ella y la desconfianza de los actores organizados. En un contexto, además, en que la crisis exigía asignar costos, incluso a las propias bases, para lo cual se requerían acuerdos transicionales (la aceptación de esos costos a cambio de beneficios futuros) que difícilmente podían canalizarse a través de la opinión y los grupos informales. Tal como se comprobó con las virulentas reacciones de sectores medios, mayoritariamente votantes de la Alianza, ante sus medidas tributarias.

Fueron entonces las mismas razones que permitieron al Frepaso y a la Alianza sus meteóricos éxitos iniciales, las que les dificultaron conservar desde el gobierno los apoyos conquistados. Así, el fracaso de la estrategia desarrollada desde mediados de los noventa, cuya pieza fundamental fuera la convergencia y cooperación de fuerzas heterogéneas en la construcción de una opción progresista competitiva con el peronismo, dio paso a una aguda faccionalización del campo de la centroizquierda, que reprodujo los ya tradicionales problemas de atomismo y precariedad organizativa de ese sector en el país (aunque algunos de sus fragmentos serían transitoriamente beneficiados), y a un no menos grave descrédito de aquellas premisas, reemplazadas por las convicciones más o menos tradicionales en este

lado del espectro político. La involución del sector acompañaría, así, la plena recuperación por parte del peronismo de su posición política predominante.

3. Nuevamente, la centralidad del peronismo y la fragmentación de la izquierda

Lo dicho recién se reflejó, por un lado, en el florecimiento de efímeras fuerzas de centroizquierda y de izquierda, que en las elecciones de renovación parlamentaria de 2001 lograron captar buena parte del voto que se fugó de la Alianza (Afirmación para una República de Iguales, ARI, formado ese mismo año por dirigentes provenientes de la UCR y del Frepaso, obtuvo 1.600.000 votos, 15% del total, mientras que el resto de las agrupaciones de izquierda reunía en conjunto una cantidad similar), pero que fueron incapaces de formar una opción amplia y perdurable. A consecuencia de lo cual, para las presidenciales de 2003 el ARI había perdido ya buena parte de su atractivo inicial, y su candidata, Elisa Carrió, se ubicó en quinto lugar; mientras el resto de la izquierda perdía todo el terreno ganado dos años antes. En las elecciones distritales de fines de 2003 se agravaría este retroceso, lo que implicó se redujera significativamente el número de diputados nacionales, provinciales y cargos municipales que habían logrado entonces.

Por otro lado, en el reforzamiento del abanico populista, que permitiría al peronismo ofrecer distintas opciones de salida de la crisis, mostrándose como única fuerza capaz de asegurar la gobernabilidad en la emergencia. Gracias a ello retuvo el apoyo de los sectores populares y atrajo a franjas medias progresistas, igualmente fragmentadas, que se plegaron primero a los gobiernos provisionales que siguieron a la caída de De la Rúa en diciembre de 2001, y posteriormente, y con más fuerza, al gobierno de Néstor Kirchner. En tanto la responsabilidad por la crisis recayó en la Alianza y en De la Rúa, el peronismo pudo descargar en ellos las generalizadas protestas sociales que acompañaron la salida de la convertibilidad (la devaluación de la moneda fue resuelta en enero de 2002 por Duhalde, designado presidente provisional días antes por la Asamblea Legislativa) y la expropiación parcial de los depósitos bancarios que siguió al congelamiento aplicado por Cavallo en los últimos días de 2001 y acompañó el *default* de la deuda. La gestión de un fenomenal ajuste de salarios e ingresos y generalizadas rupturas de contratos no fue incompatible, por lo tanto, con la representación de promesas de reparación social y regeneración institucional que la UCR y el Frepaso habían dejado caer por el camino, y que los candidatos peronistas, Kirchner, hasta entonces gobernador de Santa Cruz y Alberto Rodríguez Sáa, su par de San Luis, retomaron en competencia con el intento de Menem de volver al poder con un programa decididamente neoconservador y el respaldo de los grandes empresarios. El resultado de esta disputa, que se dirimió en las elecciones generales, dado que fue imposible acordar en el PJ un mecanismo interno de selección de candidatos, no fue ajeno a la participación de votantes y aliados independientes progresistas, los “transversales”, que brindaron un apoyo decisivo para que Kirchner obtuviera un segundo puesto detrás de Menem, que le permitiría acceder al gobierno cuando éste se retiró del *ballotage*. El otro, fundamental, sostén del nuevo gobierno sería el propio Duhalde, que le aseguró el respaldo del PJ bonaerense y le heredó un ministro de Economía, Roberto Lavagna, y una política de equilibrio de las cuentas públicas, tipo de cambio alto, renegociación de la deuda y los pasivos bancarios con quitas significativas y contención de la inflación, que permitiría a la Argentina recuperar en los siguientes tres años el terreno perdido desde 1998.

Para el desarrollo de esta política de reactivación, ejecutada en gran medida dentro de los parámetros de las recetas ortodoxas (superávit fiscal, tipo de cambio competitivo y saneamiento financiero), fue necesario contener las presiones por la recuperación de los ingresos, que perdieron entre fines de 2001 y 2003 alrededor de un 50% de su poder adquisitivo en el sector público y los pasivos, y algo más del 20% en el conjunto de la economía, y recién comenzarían a recuperarse bien avanzada la gestión de Kirchner, en 2005. A ello no sólo contribuyó la atribución de responsabilidades a la Alianza y al menemismo, sino la naturalización de los efectos de la devaluación del peso (que en el espacio de pocos meses pasó a cotizarse a 3 unidades por dólar) y de la inflación resultante (alrededor de 50% el primer año, aunque contenida y decreciente desde mediados de 2002). Complementariamente, Kirchner supo trazar, desde su asunción en mayo de 2003, una estrategia para compensar estos costos sociales con una orientación progresista en otros terrenos: la reapertura de los juicios por violaciones a los derechos humanos, el recambio de algunas figuras desprestigiadas de la Corte Suprema, un discurso confrontativo frente a la política exterior de EEUU y Europa, y una estrategia dura en la renegociación de contratos frente a los organismos internacionales de crédito, los tenedores de bonos, las empresas privatizadas y otros grandes beneficiarios de las reformas de los noventa. Con esas banderas en sus manos, ganó aún más apoyo de la opinión progresista y permitió a muchos dirigentes provenientes del FREPASO, incluido el propio Alvarez, y de grupos aún más a la izquierda, de raíces peronistas la mayor parte, incorporarse como colaboradores en su gobierno declamando que no se debía ver en ello un regreso al PJ sino el origen de una nueva coalición que trascendería las barreras partidarias tradicionales y transformaría de cuajo la política, la economía y la sociedad argentinas.

Pero, paradójicamente, del mismo modo que sucedió con el menemismo diez años antes, aunque con una orientación ideológica opuesta, el resultado más inmediato de esta apelación presidencial a apoyos extrapartidarios para sostener su “nuevo modelo” fue que Kirchner pudo tomar rápidamente el control del peronismo (Freytes, 2005): desde una posición marginal en su vida interna pasó a contar con el apoyo de casi todos los gobernadores, incluido el bonaerense Felipe Solá, y los sindicalistas, y a desbancar de sus posiciones de poder a eventuales o efectivos competidores, Menem, Rodríguez Sáa y el propio Duhalde: cuando Kirchner marginó a su anterior benefactor en la integración de las listas para las elecciones parlamentarias de 2005, la gran mayoría de los hasta entonces duhaldistas se alinearon con el presidente, y aquél fue ampliamente derrotado en el distrito que desde hacía 15 años controlaba férreamente (la lista del peronismo bonaerense retuvo apenas el 22% de los votos frente al 45% del oficialista Frente para la Victoria). Desde entonces el presidente contó con bloques mayoritarios y disciplinados en Diputados y el Senado, que le aseguraron la aprobación de sus proyectos. No es de asombrarse, por tanto, que este mismo triunfo fulminante pusiera en el tapete una pregunta respecto del futuro que tendrían en su coalición y su gobierno los sectores de izquierda no integrados a la estructura del PJ (de hecho, en las parlamentarias de 2005 el oficialismo perdió parte de los votos que en 2003 lo habían acompañado desde esos sectores, lo que se reflejó en los resultados electorales de grandes ciudades de Buenos Aires y Rosario). Y, más en general, si podía considerarse a las etiquetas electorales con que su coalición se identificó (FPV en 2005 y, desde que incorporó a varios gobernadores e intendentes radicales, Concertación Plural), como algo más que reediciones del frentismo tradicional del PJ, que matemáticamente desemboca en la deglución de los socios menores en el océano peronista. Preguntas éstas que se entrelazan con el ya aludido dilema de las izquierdas: ¿debían colaborar con un

sector del peronismo para alentar en él una política progresista, o bien buscar la autonomía, al precio de perder elecciones y posibilidades de influir sobre la toma de decisiones y de acceder a posiciones en el Estado?

La situación resultaba en parte novedosa, pues era la primera vez que la promesa de un “peronismo progresista” parecía estar concretándose desde el poder (la experiencia camporista en 1973 no vale como comparación, dado que apenas si se sostuvo unas pocas semanas en el gobierno). Pero, en otros aspectos, no difería mucho de las que en épocas anteriores había debido enfrentar la izquierda. ¿Cuán novedosa es, en suma, la situación generada por Kirchner y cuán innovador es él respecto de la tradición peronista?

Lo cierto es que en las filas del kirchnerismo se plantea una puja y un debate a este respecto entre dos estrategias que, aclaremos, no son necesariamente excluyentes entre sí. Una, que denominaremos transformista, apunta a utilizar las condiciones de la coyuntura en función de conservar para el peronismo la capacidad de representación de la mayoría electoral y de una coalición de apoyo suficientemente amplia para canalizar los intereses de los grupos sociales con mayor poder de presión sobre las decisiones de gobierno. En sus términos, la integración al kirchnerismo de sectores piqueteros organizados por grupos de izquierda no sólo asegura su control desde el Estado, sino la posibilidad de “equilibrar”, en una típica fórmula peronista, las presiones sindicales. Así como ambas cumplen una similar función frente a las de grupos empresarios o caudillos territoriales. La segunda estrategia, que cabe llamar rupturista, se propone reorganizar el campo político en dos coaliciones antagónicas, una progresista y otra conservadora, y supone que un paso decisivo en este camino es el quiebre del peronismo o bien la exclusión de grupos peronistas tradicionales que deben ser forzados a competir electoralmente con el gobierno como parte de una nueva oposición identificada como “la derecha”. Un buen ejemplo de la simultánea tensión entre ambas estrategias lo brinda el conflicto con el duhaldismo: si bien supuso la reabsorción de buena parte del mismo, antes y después de las elecciones de 2005, subsiste un sector “inasimilable” que es abiertamente definido por los voceros oficiales como “oposición de derecha”. La diferencia entre esta actitud frente a los disidentes internos y la planteada por Menem no es menor: si bien este último también definió una frontera entre su peronismo y el “del 45”, en su caso no existió una voluntad expresamente dirigida a excluir a facciones significativas del partido, como sí existe en el caso de Kirchner.

Muchos de los análisis sobre la etapa abierta por las elecciones de 2003 pueden caracterizarse por la privilegiada atención a una u otra de estas estrategias: es así que autores como Cheresky (2004 y 2006) y Di Tella (2003) destacan los rasgos que identifican la posición rupturista, mientras que en los textos de Freytes (2005) o Torre (2004) sucede lo contrario. Como es fácil advertir, reconocer sus ambigüedades no basta para una plena comprensión del fenómeno. Esta exige encarar un análisis más detenido de las premisas y concepciones del kirchnerismo, sus iniciativas políticas en distintos terrenos y el desarrollo de las mismas. Si bien esto nos llevará a analizar algunos capítulos de su gestión de gobierno (principalmente las cuestiones económicas, de derechos humanos y de política exterior), nos interesa de ellas no tanto una evaluación de logros y fracasos, como sus compatibilidades e incompatibilidades con una agenda de izquierda y con cada una de esas dos visiones y opciones globales sobre su papel en la historia del peronismo: como reedición de su capacidad transformista (lo que podríamos llamar “innovación dentro de la tradición”) o como ruptura de la tradición. Para adelantar las conclusiones, encontramos que la salud de la opción rupturista depende en gran medida de movilizar y radicalizar elementos de la tradición populista, por lo que aún en el caso de que termine imponiéndose,

es difícil imaginar que de ello resulte una fuerza de izquierda sólida y perdurable y un nuevo sistema de partidos.

Kirchnerismo, innovación y tradición

Con Kirchner llegó por primera vez al poder una generación de políticos que se formó entre fines de los años sesenta y setenta, conviviendo con, o participando de, la radicalización que por entonces vivió la izquierda dentro y fuera del peronismo. Kirchner se esmeró desde su asunción en vincular su imagen y su discurso con las promesas incumplidas de esa generación combativa, olvidada por la política democrática desde 1983 (protagonizada centralmente por actores que ya eran mayores en los setenta como para haberla compartido: Alfonsín, Menem, De la Rúa, Duhalde). Ello le brindó varios réditos inmediatos: le permitió reinterpretar la historia democrática hasta su aparición como una continuidad de la “larga noche de la dictadura” iniciada en 1976, con la que recién él se atrevía a romper; le permitió en el mismo movimiento dejar en el olvido las complicidades con la experiencia menemista de buena parte de sus colaboradores, y de él mismo, y relegitimar la figura presidencial, después del flaco papel hecho por De la Rúa y el carácter vicario de la breve gestión de Duhalde, resolviendo en su beneficio el reclamo de la opinión por una renovación del plantel político (la conocida consigna “que se vayan todos”, que se siguió escuchando hasta bien avanzada la salida de la crisis), y recrear una ética y un horizonte para la democracia argentina tras la debacle de 2001. En este aspecto, Kirchner no sólo interpretó hábilmente las expectativas de la sociedad argentina, sino también las tendencias dominantes en la región, que anunciaban una ola de rechazo al neoliberalismo y la formación de gobiernos progresistas o de izquierda con una agenda nacionalista frente a Estados Unidos, de mayor intervención del Estado en la economía y al menos declamada vocación distributiva. Kirchner supo presentarse así, como lo hiciera Menem en 1989, como un líder “actualizado”, con “convicciones férreas”, que en su caso se correspondían tanto a su militancia juvenil, como a la comprobación ya madura de que la democracia debía recuperar su sentido como “gobierno del pueblo, por y para el pueblo”.

Su posición fue en principio débil en términos electorales y partidarios, aunque no en cuanto a oportunidades económicas ni a recursos de autoridad pública. La coyuntura económica, tanto externa como interna, no podía ser más auspiciosa: altos precios de los productos exportados, bajas tasas de interés, salarios, jubilaciones y tarifas congelados, pasivos defaulteados y relativa indiferencia del gobierno norteamericano ante la ruptura de contratos (demasiado ocupado con Medio Oriente, se mostraría neutral, incluso tolerante, ante las dilaciones en volver a la normalidad y en reparar la confianza de los inversores, y aún ante la quita de más del 60% en los bonos decidida a principios de 2005). Esa coyuntura se prolongaría por varios años abriendo un escenario de estabilidad y crecimiento. Con lo cual, pese a los fuertes motivos de disputa planteados con el empresariado, no se formó un frente local o externo capaz de amenazar al gobierno con una masiva fuga de empresas o inversiones. Al contrario, los empresarios tendieron a acomodarse a las nuevas condiciones de negociación impuestas por el oficialismo, y volvieron a invertir en la medida en que ello les permitiera sacar provecho de la expansión. Lo que ayudaría al gobierno a incrementar su poder de presión y a alentar una acotada recuperación de salarios e ingresos a medida que se redujo la desocupación (que a marzo de 2007 había descendido a menos del 10%) y se consolidó la reactivación (por esta vía, el

ritmo de crecimiento se mantuvo elevado, alrededor del 9%, y la pobreza disminuyó a cerca del 35 a fines de 2006 – por cierto, todavía lejos del 18% de 1993).

En cuanto a la situación del sector público, las reformas de los noventa y las decisiones adoptadas a comienzos de 2002 habían permitido que por primera vez en mucho tiempo él no fuera el pato de la boda de la crisis, y al contrario, estuviera en condiciones de descargar costos tanto sobre asalariados como sobre empresarios. El congelamiento de las tarifas de las empresas de servicios en manos privadas permitió que se refrenara el efecto inflacionario de la devaluación sin afectar el equilibrio fiscal. El congelamiento se mantendría más allá de la crisis, como vía para compensar la pérdida de ingresos de los consumidores, y también como medio para retener el margen de discrecionalidad logrado por el Estado. Kirchner orientó las tratativas con las empresas de servicios, incluidas las de transporte, antes que al restablecimiento de las reglas de mercado o a la redefinición de los contratos y la mejora de los marcos regulatorios, a establecer acuerdos puntuales que permitieran consolidar su poder para fijar precios, decidir inversiones, asignar subsidios compensatorios, etc.. Algo semejante puede decirse de la política tributaria: el gobierno nacional echó mano a principios de 2002 a impuestos de emergencia para asegurar el equilibrio fiscal; entre los cuales destacan las retenciones a las exportaciones, que se habían vuelto aceptables gracias a los precios internacionales y la devaluación. La recuperación económica no dio paso a una normalización sino a la intensificación del uso de esos recursos excepcionales, que se volverían fundamentales, desde 2003, para sostener el superávit primario del Tesoro nacional, combatir la inflación y asignar premios y castigos entre sectores empresarios. El recurso a decretos de necesidad y urgencia para fijar tasas impositivas, regular el comercio exterior y reasignar partidas de gasto, respaldados por las leyes de regulación de los DNU y de superpoderes delegados en materia presupuestaria (aprobadas a mediados de 2006), impusieron límites estrictos a las posibilidades de ingerencia del Congreso y acrecentaron el margen de autonomía con que se maneja el Ejecutivo en este terreno. Como vemos, en detrimento de una posible opción reformista, el gobierno puso en marcha viejos instrumentos orientados a mejorar su situación inmediata, e incrementar y dar continuidad a su poder sobre otros actores públicos y privados. Lo que significó, en concreto, reforzar los mecanismos de un Estado patrimonialista y de un capitalismo rentístico y político que las reformas de los noventa no habían liquidado.

Por cierto, las reformas que podrían alterar este orden parecen, luego de la crisis de 2001, menos necesarias o urgentes de lo que fueron en los noventa. Y ello porque el régimen basado en la asignación de rentas desde el Estado ofrece ahora oportunidades de crecimiento en el marco de políticas macroeconómicas más consistentes y sólidas que las de entonces. En este y otros terrenos se plantea una aguda disonancia entre la racionalidad de corto plazo, que anima al gobierno y sus aliados más firmes, y los intereses de esos y otros actores en el largo plazo, que podrían satisfacerse con reformas en pro de un Estado más autónomo, transparente y mercados más competitivos. En una situación como esta, en que existen grados de libertad considerables, se revela hasta qué punto es decisiva la capacidad de previsión y la decisión estratégica de los actores gubernamentales.

Algo semejante cabe decir de la relación entre el Estado y el sindicalismo. Si bien la CTA ocupó inicialmente un espacio relevante en el kirchnerismo, y vio satisfechas algunas de sus demandas de reversión de reformas laborales de los noventa, fracasó en el intento de lograr personería gremial y un cambio del marco institucional que beneficia a la CGT y protege las espaldas de la dirigencia tradicional, en particular la regla que establece el sindicato único por rama de actividad, y el sistema de distribución de recursos para las

obras sociales. El disciplinado alineamiento de la central tradicional detrás de las políticas oficiales, logrado por los mismos dirigentes que cumplieron esa tarea en los noventa, y con las mismas armas (junto a los subsidios a obras sociales se destaca la participación sindical en emprendimientos empresarios) desaconsejó al gobierno de intensificar sus vínculos con sindicalistas reformistas. A su vez, la pérdida de gravitación de la CTA llevó a la radicalización de sus demandas en las negociaciones colectivas y el Congreso, dando la razón a la CGT, interesada en mostrarse como único interlocutor confiable en el combate de la inflación, la canalización de las protestas y la concertación con los empresarios.

La correlación entre disciplinamiento de actores tradicionales del peronismo y peronización del gobierno se da también, como ya adelantamos, en el plano estrictamente político. Desde el momento en que el PJ se alineó detrás del presidente, al desmembrarse el duhaldismo, sus bancadas parlamentarias proveyeron disciplinado sustento a los proyectos del Ejecutivo y el kirchnerismo no peronista perdió gravitación. Aquellos transversales que optaron por plegarse al Frente para la Victoria se diluyeron entre los mucho más nutridos y mejor pertrechados grupos justicialistas. Los que preservaron su autonomía, en tanto, siguieron padeciendo una marcada fragmentación. El gobierno retaceó apoyo a sus intentos de presentar listas electorales o de conformar una estructura en la que converger (su misma denominación como transversales alude a la dispersión y falta de identidad y organización común, como si se tratara de una condición intrínseca), por lo que siguieron careciendo de líderes autónomamente legitimados y espacios electorales firmes. Para colmo, en su esfuerzo por diferenciarse a la vez del peronismo oficial y de la oposición de izquierda, radicalizaron sus posiciones en la más rancia tradición populista, lo que los llevó a enfrentar al gobierno en la votación de leyes para él esenciales.

Los terrenos en los cuales más claramente este sector y los intelectuales de izquierda afines al gobierno demostraron poder influir en la agenda oficial y obtuvieron “pruebas” de la afinidad entre la acción gubernamental y sus ideas fue en las políticas de derechos humanos y las relaciones exteriores. Precisamente ellas fueron las áreas utilizadas por el gobierno para obtener apoyo de la opinión progresista independiente. Los logros en ambos terrenos son, con todo, discutibles desde una perspectiva de izquierda: coyunturalmente beneficiosos para el gobierno en el plano doméstico, por la contribución de esa opinión para ganar legitimidad y para disciplinar a las “fuerzas propias” (como ya demostró en la provincia de Buenos Aires, Kirchner está dispuesto a echar mano de esos votantes independientes para castigar a peronistas rebeldes y a acorralar a sus partidarios en antagonismos excluyentes que él se reserva el derecho a interpretar), no parecen influir mucho en otros terrenos, ni las políticas así promovidas alcanzan consistencia y solidez. Antes bien, en algunos aspectos resultan a todas luces contradictorias, y en otros son poco más que excusas legitimantes de decisiones de otro modo conflictivas. Veamos.

Kirchner incorpora en la tradición populista principios y valores de izquierda, como hizo antes Menem con los neoliberales, y antes que ellos el propio Perón con todo tipo de ideas. ¿Cuánto innova al hacerlo en la cultura peronista y cuánto aporta a la eficacia y legitimidad de estas ideas en la vida política en general? Al respecto la política exterior es sintomática. Kirchner se ha plegado al clima político-cultural imperante en la región, inclinado hacia un populismo radicalizado, suficientemente difuso como para dar cobijo por igual al indigenismo nacionalista de Morales en Bolivia, Ollanta Humala en Perú y Correa en Ecuador, o al filocastrismo de Chávez. Y se ha esforzado por mostrarse equidistante entre esos líderes y la izquierda moderada de la región, con el doble propósito de ganar adhesiones domésticas y cumplir un rol de bisagra en los múltiples conflictos que

se plantean entre aquellos y Brasil, Chile o México. Con todo, pasada la etapa inicial en que la crisis podía aún justificar ante estos últimos y los países desarrollados una actitud reñida con las reglas de derecho internacional y los marcos de cooperación para ellos aceptables, la diplomacia argentina ha ido perdiendo capacidad de interlocución, e incluso una mínima credibilidad que le permita promover los intereses económicos y estratégicos argentinos en la región y el mundo. Las tensiones crecientes con Gran Bretaña por Malvinas, con Uruguay por las plantas papeleras en construcción sobre el límite fronterizo y con Chile por la provisión de gas, la gélida distancia de la política exterior norteamericana tras la cumbre de las Américas organizada en Mar del Plata (que significó votaciones negativas a créditos en organismos financieros y duras críticas públicas), y la exclusión de foros internacionales en que son incluidos en cambio los otros referentes de la región, son algunos de los costos que esta política impone. Sin beneficios compensatorios en estos ni otros terrenos. Aunque en la medida en que internamente él pueda seguir cosechando frutos de contraponer los intereses nacionales a los del “Imperio”, y responsabilizar a los poderosos del mundo (el FMI, las grandes empresas, etc.), por los problemas argentinos, no es esperable que se abandone esta vía.

También es reveladora la cuestión de los derechos humanos. La reapertura de juicios por crímenes cometidos durante la dictadura militar, posibilitada por la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final promovida por el gobierno en el Congreso (completando un proceso de revisión que se inicia, en verdad, al final de la etapa menemista) tiene un enorme impacto público y gran relevancia cultural e histórica. El procedimiento seguido por el gobierno y en particular su discurso público hacen poco, sin embargo, por incorporar los fundamentos del respeto por los derechos a la cultura política. Es más importante para el oficialismo impugnar el proyecto político y económico atribuido a la dictadura, por definición “opuesto a los intereses nacionales y populares”, polarizando la vida política entre un bando autoritario y antidemocrático, en el que militarían sus adversarios potenciales o efectivos, y uno popular y legítimo, hegemónico por él mismo, cuyas raíces se remontarían a la generación combativa de la que abreva y que fuera víctima de las violaciones. Contradicción ésta que estaba ya presente desde un comienzo en el propio movimiento de derechos humanos y que refleja la escasa mella que ha hecho en él y en la izquierda argentina en general el liberalismo político, pese a la atención prestada en su discurso posdictatorial a los derechos individuales.

No es casual entonces que en el discurso oficial adquiriera mucha más asiduidad y grandilocuencia la proclamación de una demorada pero indudablemente justa victoria sobre los opresores de 1976, cuyo máximo exponente es Martínez de Hoz, que el interés por integrar a la tradición peronista la nueva cultura de derechos que en la sociedad civil y política comenzó a tomar cuerpo en 1983. La desvalorización manifiesta del presidente de lo que significó la transición democrática en este terreno (expresada no sólo en el argumento sobre la continuidad entre 1976 y 1983, sino en el “olvido” de los juicios a las juntas y la tarea de la Conadep) lejos de significar un error o falta, es parte esencial del dispositivo político-cultural montado, que aspira a incorporar y disolver los derechos humanos en la tradición nacional-populista, antes que abrir ésta a la influencia de aquellos. Colateralmente, de lo que se trata es de disipar la mácula de los gestos de reconciliación prodigados en tiempos de Menem a los personeros de la dictadura, en particular a sus aliados económicos. El discurso de fronteras insuperables entre los “autoritarios y liberales” y el pueblo, cuanto más inconsistente con la experiencia de los noventa, mayor atractivo supone para Kirchner como recurso de disciplinamiento, ya que eleva los costos y riesgos

de expresar disensos. La “nueva Argentina” y el “proyecto nacional” requieren de una historia oficial moldeada a voluntad y de una oposición derechista, de preferencia procesista, virulentamente enfrentada a los derechos humanos y a todos los valores progresistas. La referencia al ‘modelo de la concertación chilena’ habla a las claras del esquema al que se pretende se amolden las fuerzas políticas, una vez más en términos inversos a aquellos en que el ‘ejemplo de Pinochet’ supo inspirar al menemismo.

La aspiración de contar como adversario con una derecha procesista ha llevado al gobierno de Kirchner a privilegiar el enfrentamiento con figuras militares y sectores civiles a ellas asociadas. La virulencia verborrágica de los discursos no tiene un correlato en la práctica en cuanto las Fuerzas Armadas y de seguridad se muestran absolutamente disciplinadas y despolitizadas. Sin embargo, se otorga una gravitación pública descollante a figuras y discursos hasta poco tiempo antes marginales, y se abre la puerta a una potencial reactivación de sentimientos políticos en esas instituciones, en las que existen sin duda disposiciones favorables a una reacción no menos virulenta. Pero en tanto no existen muchos actores relevantes dispuestos a hacer el papel que Kirchner reclama de la oposición (más allá de los mencionados sectores de las Fuerzas Armadas, a los que podemos agregar algunos de la jerarquía católica que carecen de todos modos de representatividad) y en cambio abundan, igual que en etapas anteriores, una cantidad de actores “mal colocados” en términos de izquierdas y derechas, con los que no hay más remedio para el gobierno que definir acuerdos y desacuerdos coyuntural y puntualmente, será difícil que se reitere entre nosotros la situación de Chávez en la Venezuela actual. O la de Perón de los cincuenta.

Con todo, en la medida en que el oficialismo cuenta con recursos fiscales y políticos para forzar alineamientos, continúa con sus intentos de delinear un nuevo sistema de partidos acorde a aquellas premisas. Y aunque no avance decisivamente en ese cometido, lo hace en disolver lo que queda del existente. En un contexto en que la oposición ha perdido gravitación social e institucional, dado que el grueso de las corporaciones empresarias y sindicales se mueve en el interior o la vecindad de la coalición oficial, y el peronismo ha dejado atrás la crisis de sucesión del liderazgo y las amenazas de fractura, es natural que más y más figuras políticas no peronistas se vean obligadas a optar entre luchar en el desierto con estructuras políticas carentes de credibilidad y cohesión (Torre, 2004) o rendirse a la cooptación. El pase al oficialismo de gobernadores, intendentes y legisladores electos por fuerzas de oposición, en particular por la UCR, a través de la Concertación Plural, nos muestra hasta qué punto puede avanzar en una construcción coalicional que, aunque difícilmente perdure y más remotamente aún pueda establecerse como la izquierda de un nuevo sistema, hará posible que el peronismo refuerce su posición predominante.

Problemas nuevos y viejos

Kirchner colocó a las fuerzas de izquierda y centroizquierda frente a un dilema que en los noventa habían creído superado: sumarse y colaborar con su gobierno, con el riesgo muy palpable de diluirse en el océano peronista, o intentar diferenciarse para construir un espacio propio y autónomo, con fuertes posibilidades de terminar aisladas y volverse irrelevantes. Pero ello responde más que a una innovación decisiva en el peronismo o en el sistema político en general, al circunstancial éxito económico de su gestión, en una coyuntura inéditamente favorable, y al descrédito de la opción no peronista que resultó del fracaso del FREPASO y la Alianza. Ventajas que, a la corta o a la larga, se agotarán.

Mientras tanto, puede que las izquierdas argentinas gocen de un ciclo de auge, tanto en el kirchnerismo como incluso en la crítica a sus límites y ambigüedades. En parte como reflejo de la ola regional. En parte, consecuencia de la legitimación de los valores de izquierda que ha impulsado Kirchner en el peronismo y fuera de él. Pero, en primer lugar, es difícil que de ello se siga la rápida superación de los problemas históricos de identidad, ideología, consistencia programática y fortaleza organizativa de las izquierdas. Segundo, cabe dudar de que la formación de un vértice de esa orientación en el peronismo signifique la definitiva solución del dilema que ese partido presentó a quienes intentaron ubicarlo ideológicamente, y la pronta emergencia, en consecuencia, de otro polo no peronista y de centroderecha que completaría, esta vez sí, un nuevo y más estable sistema de partidos. El mismo éxito del peronismo en reinventarse y su propensión a usar las crisis como mecanismo de sucesión del liderazgo, ¿no alientan acaso a pensar que al final del ciclo kirchnerista nos espera una situación similar a la que se vivió al final del menemista?, ¿no terminará entonces esta experiencia, como sucedió con el libre mercado en 2001, en el extravío de los valores de izquierda, no sólo de su legitimidad prestada sino también del poco o mucho crédito que autónomamente pudieran haber tenido previamente? Podrá decirse que las circunstancias económicas han cambiado, pero no es conveniente subestimar la fuerza destructiva de la regla de oro de la política peronista, la que indica que el presidente es el jefe indiscutido sólo hasta que se convierte en el pato cojo a desplazar. Independientemente de las circunstancias que la sepultaron, lo cierto es que la experiencia de los noventa también arroja interesantes lecciones para nuestros días a este respecto.

Cabe consignar, por último, que en varios terrenos las políticas kirchneristas se han ido volviendo más y más incompatibles con una agenda de izquierda a medida que él se consolidó en el poder, desde 2005 en adelante: el control de los medios de comunicación y la deliberación pública, el manejo de la Justicia, el de las políticas sociales y el control de la inflación. Con respecto a lo primero, Kirchner se ha mostrado completamente indiferente a asegurar desde el Estado condiciones favorables al acceso libre a la información, el debate de las medidas de gobierno y el pluralismo de las opiniones. Jamás brindó una conferencia de prensa, ni ha permitido que sus funcionarios lo hagan. El control económico de los medios se ha intensificado a través de la distribución de la publicidad oficial, la asignación y renovación de licencias y el castigo de periodistas independientes. En cuanto a la Justicia, a medida que comenzaron a surgir denuncias de corrupción en esferas oficiales, el Ejecutivo evolucionó de una posición reformista y de confrontación con el sistema judicial montado en la década anterior, a la activa connivencia con él y la búsqueda de instrumentos para perfeccionar su control del mismo. En tercer lugar, en cuanto a las políticas sociales, el Ejecutivo también dejó pasar oportunidades para poner en marcha profundas reformas en dirección a proveer a las mismas de transparencia, eficacia, imparcialidad y alcance universal, optando por centralizar el control y aumentar el volumen de las redes clientelares que le aseguran un inmediato control territorial. Por último, desde la salida de Roberto Lavagna del Ministerio de Economía, a fines de 2005, y el consecuente fortalecimiento de los sectores más proclives a un aumento de la intervención del sector público en la economía, el gobierno ha optado por políticas dirigidas a mantener el ritmo de crecimiento a costa de profundizar desequilibrios inflacionarios, que son a su vez compensados con mayores y más coyunturales intervenciones discrecionales: controles de precios, subsidios, mayores retenciones, regulaciones punitivas, prohibiciones de exportación y, finalmente, la intervención sobre las oficinas de estadística componen un cuadro de política apenas

coyunturalmente eficaz y tendencialmente destructivo tanto de las reglas de mercado como de un marco regulatorio previsible, consistente, imparcial y sostenible en el tiempo.

Replanteos de un interminable debate

No ha escapado al lector que a lo largo de este trabajo hemos manejado de modo situacional y por tanto ambiguo los dos conceptos centrales del argumento: izquierda y populismo. Antes que forzar una definición, que en este caso a duras penas hubiera ayudado a resolver las ambigüedades, al comienzo del trabajo, como mandaría el método, intentaremos ahora aclararlas, sin garantías de tener más suerte, pero con el ánimo de clarificar el análisis histórico y político más que de resolver las polémicas teóricas.

Empecemos por la izquierda. Resulta llamativo, tanto en el terreno intelectual como en el propiamente político, que las posiciones autodefinidas como de izquierda en la actualidad difieran muy poco de las que podíamos hallar en los años sesenta y setenta: salvo por cierto en un punto, no insignificante, el uso de las armas, en el diagnóstico sobre la naturaleza del capitalismo y la dependencia del imperialismo, sobre el carácter formal y meramente instrumental de las instituciones de la república, y su debida subordinación al “poder popular”, sobre la naturaleza de las fuerzas sociales amigas y enemigas, no parece haber mayores diferencias. Esto es aún más llamativo si tenemos en cuenta el gran impacto que tuvo en el país el fracaso de los proyectos revolucionarios, así como años después la caída del bloque soviético. Argentina se distinguió, entre los países latinoamericanos, en los años ochenta y noventa, por la radicalidad del giro protagonizado por amplios sectores intelectuales y políticos de izquierda o progresistas hacia posiciones socialdemócratas o moderadas; la valoración de la transición democrática por parte de quienes se sumaron al alfonsinismo, al PI y, luego, a la renovación peronista, a comienzos de los ochenta, anticipó la vuelta de tuerca de fines de la década, cuando el éxito inicial de las reformas de mercado reforzó la tesis favorable a la “adaptación defensiva” a las nuevas condiciones económicas y sociales que imponía la reconversión capitalista y la globalización. No sólo en los partidos ya influidos por la modernización en años anteriores: nuevos contingentes de militantes y dirigentes provenientes del peronismo, el PC y sectores cristianos se plegaron en tiempos de Menem a una más o menos resignada y más o menos reflexiva aceptación de los nuevos tiempos. Si aparentemente los frutos de ese esfuerzo de adaptación y renovación se disolvieron para dejar paso a las concepciones más tradicionales de la izquierda política e intelectual fue en gran medida por la simultaneidad entre el fracaso del FREPASO y el de las reformas de mercado, por un lado, y a que esa maduración reflexiva no había sido tan extendida ni tan profunda como pareciera, por otro. La crisis de 2001, como ya explicamos, deslegitimó a quienes habían impulsado desde distintas fuerzas políticas ese proceso, colocándolos en la incómoda situación de dar explicaciones, o mejor olvidar su incómodo e inmediato pasado. Y en cambio colocó en un primer plano a quienes hasta entonces, por propia decisión o por la sucesión previa de “coyunturas desfavorables”, habían estado en un segundo plano y alejados de la toma de decisiones, y ahora podían impugnar lo hecho en su ausencia. En la economía, en derechos humanos, en política exterior y en el más esencial terreno del respeto de los procedimientos republicanos, se replica este rápido y radical giro del sentido común de izquierda a favor de las posiciones más tradicionales, conservadas por aquellos que habían vivido críticamente y desde su ostracismo interno las experiencias de Alfonsín, la renovación, Menem y el frepasismo. No es casual entonces que esta izquierda asuma como su fórmula cultural y programática más cara una suerte de revisionismo

histórico y político, que le permite enlazar su experiencia actual a las promesas extraviadas de los años sesenta y setenta y la lleva a plantearse, más que reformas, reparaciones.

Esta orientación de la izquierda, que aclaremos comparten buena parte de quienes adhieren al kirchnerismo con muchos de quienes lo critican, se enlaza estrechamente con dos rasgos que han sido característicos de la tradición populista: la oposición radical y esencialista entre el pueblo y sus enemigos, que tienden a conformar por tanto dos mundos social, cultural y valorativamente ajenos entre sí, irreconciliables, y el desprecio por las instituciones liberales y republicanas a favor de las virtudes inherentes a la voluntad del pueblo, adecuadamente interpretada por sus líderes. Estas tesis resultaron rehabilitadas a partir de la experiencia de las protestas de diciembre de 2001 y la consecuente caída de De la Rúa, debidamente estilizada en relatos que, de buena o mala fe, ignoran el papel protagónico que les cupo en ello a sectores muy poco espontáneos del PJ bonaerense. Y han sido sistemáticamente cultivadas desde entonces, tanto en el relato oficial como en el público. En lo primero se revela un interés por asegurarse una legitimidad que se valora “sustantiva” y no simplemente “formal”, así como también y muy significativamente la estratégica inclusión de la movilización popular como elemento útil, hasta imprescindible, para la gestión de gobierno. Estrategia que ha contribuido a perpetuar en la vida política el recurso a la acción directa como medio legítimo para resolver los conflictos. En términos más amplios, revela la fortaleza en la cultura política de una tradición populista que sin duda resultó de utilidad en el proceso de salida de la crisis, pero que a medida que se prolonga en el tiempo y más allá de la emergencia, se revela como una carga creciente.

Bibliografía

- Abal Medina, Juan Manuel (comp..) 2006 *La nueva izquierda partidaria*, Buenos Aires: Prometeo.
- Aboy, Gerardo 2001 *Las dos fronteras de la democracia argentina. La reformulación de las identidades políticas de Alfonsín a Menem*, Rosario: Homosapiens.
- Adrogué, Gerardo y Melchor Armesto 2001 “Aún con vida. Los partidos políticos argentinos en la década del noventa”, *Desarrollo Económico*, Buenos Aires, N° 160, vol. 40, enero-marzo 2001, pags. 619-652.
- Bonvecchi, Alejandro 2001 “Political Processes in Financial Crises”, Buenos Aires: mimeo.
- Bonvecchi, Alejandro, y Palermo, Vicente 2001 “En torno a los entornos: presidentes débiles y partidos parsimoniosos”, *Revista Argentina de Ciencia Política*, Buenos Aires, año 3, N° 6, pags. 34-78.
- Bonvecchi, Alejandro 2002 “Estrategia de supervivencia y tácticas de disuasión. Los procesos políticos de la política económica después de las reformas estructurales”, en Marcos Novaro (comp.) *El derrumbe político*, Buenos Aires: Norma.
- Bruhn, Kathleen 2000 “Out in Left Field: Neoliberalism and the Dilemmas of the Mexican Left”, paper presented at IPSA, Quebec, August 2000.
- Cheresky, Isidoro e Inés Pousadela (comps.) 2004 *El voto liberado. Elecciones 2003: perspectiva histórica y estudio de casos*, Buenos Aires: Biblos.
- Cheresky, Isidoro (comp..) 2006 *La política después de los partidos*, Buenos Aires: Prometeo.
- Cherny, Nicolás 2005 “Política y economía en la gestión de la crisis argentina. ¿Una salida de centroizquierda?”, Madrid: mimeo.
- Ciria, Alberto 1975 *Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946)*, Buenos Aires: Ed. de la Flor.
- Curia, Eduardo 2001 *La Alianza y la “Convertibilidad Progresista”: el sueño roto*, Buenos Aires: Ediciones Realidad Argentina.
- Di Tella, Torcuato 2003 *Después del derrumbe*, Buenos Aires: Galerna.
- Fazio, Horacio (comp.) 2001 *La política en discusión*, Buenos Aires: FLACSO.
- Figueiredo, Angelina y Fernando Limongi 1999 *Executivo e Legislativo na nova ordem constitucional*, Río de Janeiro: Editora da FGV.
- Freytes, Carlos 2005 “La transversalidad de Kirchner”, Buenos Aires: mimeo.
- Halperín Donghi, Tulio 1991 *La democracia de masas*, Buenos Aires: Paidós.
- Heredia, Blanca 1998 “¿A contracorriente? La propuesta económica del PRD, 1988-1998”, CIDE, México.

- Jozami, Eduardo 2004 *Final sin gloria. Un balance del Frepaso y de la Alianza*, Buenos Aires: Biblos.
- Lanzaro, Jorge (comp.) 2001 *Tipos de presidencialismo y coaliciones políticas en América Latina*, Buenos Aires: Clacso.
- Mocca, Edgardo 2002 “Defensa de la política (en tiempos de crisis)” en Marcos Novaro (comp.) *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*, Buenos Aires: Norma.
- Morales Solá, Joaquín 2001 *El sueño eterno. Ascenso y caída de la Alianza*, Buenos Aires: Planeta.
- Natanson, José 2004 *El presidente inesperado*, Rosario: Homosapiens.
- Novaro, Marcos y Vicente Palermo 1998 *Los caminos de la centroizquierda: dilemas y desafíos del FREPASO y de la Alianza*, Buenos Aires: Losada.
- Novaro, Marcos y Vicente Palermo 2003 *La dictadura militar (1976-1983)*, Buenos Aires: Paidós.
- Novaro, Marcos (comp.) 2002 *El derrumbe político en el ocaso de la convertibilidad*, Buenos Aires: Norma.
- Roberts, Kenneth 1998 *Deepening Democracy? The Modern Left and Social Movements in Chile and Peru*, Stanford: Stanford University Press.
- Sarlo, Beatriz 2001 “Ya nada será igual”, *Punto de Vista*, Buenos Aires, Nº 69, pags. 2-11.
- Schipani, Andrés 2006 “Movilizaciones de desocupados en Argentina y Chile durante las reformas de mercado. Un estudio comparado acerca de las organizaciones piqueteras”, UTDT, Buenos Aires.
- Torre, Juan Carlos 1990 *La vieja guardia sindical y Perón. Sobre los orígenes del peronismo*, Buenos Aires: Editorial Sudamericana-Instituto Torcuato De Tella.
- Torre, Juan Carlos 2004 “Los huérfanos de la política de partidos”, Buenos Aires: mimeo.